



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

Expediente N° 44641/2022

AUTOS: LUMMA S.A. c/ ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS s/IMPUGNACION DE DEUDA

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reunida la Sala Segunda de la Excelentísima Cámara Federal de la Seguridad Social para dictar sentencia en estos autos, se procede a votar en el siguiente orden:

EL DOCTOR JUAN A. FANTINI ALBARENQUE DIJO:

Llegan las presentes actuaciones a esta Sala en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la Resolución 2021-11-E-AFIP-DVRRME#SDGOPII que desestima la impugnación de deuda determinada en Acta de Inspección N°0185520230101 por aportes y contribuciones, capital e intereses por un monto de \$24.359.481,27 período 12/2016 a 07/2017 y Acta de Infracción 1855202 por la constatación de infracciones al régimen de la Seguridad Social, correspondiéndole la sanción por aplicación del art. 5° de la R.G AFIP N°1566/10, consistente en el 100% de los aportes y contribuciones omitidos por \$9.404.677,21.

La impugnante acredita el pago del seguro de caución extendido por Triunfo Cooperativa de Seguros LTDA, póliza N°45.344 para lograr la habilitación de la instancia judicial.

Desde el punto de vista procesal entiendo que corresponde declarar habilitada la revisión judicial de lo actuado pues, si bien la regla solve et repete se ha considerado congruente con las garantías procesales que emanan del art. 18 de la CN y 8° del Pacto de San José de Costa Rica, tal imperativo legal ha sido atenuado admitiéndose la validez de la presentación de seguros de caución (CSJN 04/11/08 “Orígenes AFJP SA c/AFIP - DGI” Fallo 331:2480), situación que se configura en autos.

De las actuaciones administrativas se desprende que el cargo tiene como origen el cruce de datos obtenidos y de las diferentes consultas efectuadas a los sistemas informáticos “Efísico y Seguimiento de Fiscalización” en relación con el análisis de la situación previsional de los servicios facturados por proveedores y el personal ocupado.

Con motivo de su investigación el ente administrativo obtuvo las siguientes conclusiones:

Fecha de firma: 13/07/2023

Firmado por: JUAN A FANTINI ALBARENQUE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: WALTER FABIAN CARNOTA, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

Firmado por: NORA CARMEN DORADO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: AMANDA LUCIA PAWLOWSKI, SECRETARIA DE CAMARA



#37058217#360979304#20230628090413339



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

1) Que LUMMA S.A se encuentra relacionada como cliente de la sociedad proveedora MIBETH SRL y que ésta última no acredita capacidad suficiente para prestar el servicio en cuestión durante los periodos bajo análisis atento que las compras están respaldadas con facturas apócrifas. Que no pudo determinarse los costos y los CUIL de la mano de obra utilizada, presenta resistencia a la fiscalización y además no posee bienes para realizar los trabajos contratados. La fiscalización realizada concluye que MIBETH SRL para el periodo 01/2016 al 10/2017 no realizó efectivamente las operaciones correspondientes a las facturas que emitió, no contando con la capacidad operativa necesaria para realizar la venta de los bienes y/o servicios facturados a LUMMA S.A.

2) LUMMA SA es informada por MIBETH SRL mediante facturación electrónica de los años 2016 y 2017 por pesos \$8.000.000,01 que corresponde a servicios realizados a la investigada.

3) LUMMA SA informa como subcontratista de obra a CELI MARCOS ARIEL e INSITU S.R.L., pero al tratarse de obras finalizadas no puede realizarse el relevamiento del personal de las mismas. No obstante, el organismo manifiesta que LUMMA SA no cumple con lo establecido en el art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo en relación a las empresas subcontratistas.

4) CELI MARCOS ARIEL le factura en el periodo agosto de 2015 un importe neto de \$3.731.062 a LUMMA SA por trabajos de albañilería con provisión de materiales, como así también INSITU SRL por trabajos de albañilería más provisión de materiales por un monto neto de \$9.826.502,00.

5) Dado que los proveedores de mano de obra no poseían ni dieron información relacionada con el supuesto personal que prestó servicios, se extrajo la nómina del personal declarado por LUMMA SA y se analizaron los sueldos que fueron declarados, sosteniendo que muchos no superaban el SMVM.

6) Se consultó la base Efísico Cuenta Sueldos donde surgen montos remunerativos que no fueron incluidos en dicha declaración jurada.

7) Se depuraron las remuneraciones cuil por cuil notificando a la empleadora quien hace su descargo y manifiesta que no existen supuestas diferencias en las acreditaciones bancarias.

Apelación de la actora

En primer orden, hace hincapié en que la fiscalización, según lo informado mediante F. 8000/P que obra a fs. 111 Ac





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

t. 19930-20-21 - 2do. Cuerpo (DEO 7229192), comprendía los aportes y contribuciones a la Seguridad Social por los periodos 12/2016 al 06/2017. Habiendo incluido arbitrariamente el inspector el período 07/2012 el cual no se encontraba notificado.

Luego manifiesta que al iniciar la fiscalización se extrajo la nómina del personal declarado por la firma analizando los sueldos declarados en los respectivos F.931 y consultando posteriormente la base Efísico Cuenta Sueldo por la cual el inspector sostuvo que surgen montos remunerativos que no fueron incluidos en dichas declaraciones juradas. Es decir, con datos emitidos por la base de Efísico procedió a comparar el monto SITER (información bancaria sobre los depósitos existentes en las cuentas sueldo de los trabajadores) con los depósitos efectivamente realizados por la empresa empleadora en concepto de remuneración y con las remuneraciones declaradas. A través del cruce de información, la AFIP pudo obtener el dato respecto a la suma de dinero total depositada en la cuenta sueldo de los trabajadores relevados. Aquí es donde la impugnante sostiene la existencia del error principal que consiste en dar por cierto que todo lo depositado en las cuentas sueldo de los trabajadores son depósitos efectuados por la empresa en concepto de remuneración, pues no existe ningún elemento que pueda comprobar que esos depósitos por el excedente de lo declarado hubieran sido depositados por la empresa.

Agrega la actora que una cuenta sueldo no está limitada únicamente a los depósitos de los salarios, motivo por el cual resulta burda la lógica empleada por el inspector para afirmar que de las cuentas sueldo de los empleados surgen montos remunerativos que no fueron incluidos en las declaraciones juradas.

Afirma que tal como se puede apreciar de la documental que agregó, los importes depositadas por LUMMA SA en cada CBU son los mismos que los verificados y consignados por el inspector en la columna importe de la liquidación que practica. Insiste a lo largo de su líbello que las diferencias dinerarias en las respectivas cuentas son acreditaciones que no corresponden a LUMMA S.A.

Por otro lado, entiende que en el caso de que fueran ciertas las manifestaciones del inspector, la deuda debió efectuarse por las diferencias existentes entre los montos declarados por LUMMA S.A. y los montos depositados en las cuentas sueldo de los trabajadores, cuenta que difiere de la efectuada por la Administración, que según sus dichos consiste en lo siguiente: confeccionó el F. 8016 en forma comparativa empleado por empleado, indicando en saldo negativo lo declarado por la empresa en los respectivos F. 931 y debajo, en relación al mismo empleado, el valor positivo adeudado. Para obtener ese valor positivo ajustado cometió otro error; esto es, sumó el importe depositado por la empresa a la remuneración total declarada lo que obviamente arrojó una remuneración mucho mayor a la real bruta percibida por el trabajador multiplicándose la base sobre la





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

cual debía tributarse. Concluye en que el inspector confunde desde el inicio la base sobre la cual deben calcularse los aportes y contribuciones.

La empresa impugnante peticiona se declare que la resolución en crisis resulta manifiestamente arbitraria por estar fundada en actuaciones administrativas viciadas, motivo por el cual plantea que estamos en presencia de un acto nulo por controvertir reglas unívocas que afectan esencialmente el objeto del acto.

Ahora bien, ceñida la cuestión a resolver corresponde en primer término analizar la validez del procedimiento administrativo llevado a cabo para arribar a la resolución impugnada.

Como sostuvo la Administración, la inspección se originó del cruce de datos obtenidos y de las diferentes consultas efectuadas a los sistemas informáticos Efisco y Seguimiento de Fiscalización en relación con el análisis de la situación previsional de los servicios facturados por proveedores y su personal ocupado. Se llega así a la empresa aquí apelante dado que la misma resulta ser contratista de MIBETH SRL, empresa que registra dos órdenes de intervención, de las cuales surge que la misma no acredita capacidad para prestar el servicio en el periodo bajo análisis, por estar las compras respaldadas por facturas apócrifas, y por lo tanto no poder determinarse los costos y los CUIL de la mano de obra utilizada. MIBETH informa a LUMMA S.A. como su contratista. A su vez, la apelante informa a CELI MARCOS ARIEL e INSITU SRL como subcontratistas de la misma. Y la administración al no poder relevar el personal de los subcontratistas por encontrarse la totalidad de las obras ya finalizadas, determina que LUMMA incumple con lo dispuesto por el art. 30 de la LCT en relación a las empresas subcontratistas. Considerando que los proveedores de mano de obra, es decir los subcontratistas, no poseían ni dieron información relacionada con el supuesto personal que prestó servicios, la Administración decidió extraer la nómina del personal declarado por LUMMA S.A. y analizar sus sueldos.

En este punto me quiero detener, la Administración al establecer el incumplimiento por parte de LUMMA S.A. de sus obligaciones en el marco del art. 30 de la LCT, dispone que corresponde el análisis de la nómina del personal de la apelante, cuando en rigor de verdad de dicha presunción (es decir del incumplimiento de las obligaciones del art. 30 de la LCT), surge simplemente la solidaridad de la misma respecto a los obligaciones dispuestas en la Ley de Contrato de Trabajo sobre el personal de las subcontratistas, pero no necesariamente un incumplimiento en materia de Seguridad Social sobre sus propios empleados. Sin embargo, en el marco de dicha presunción, y dada la imposibilidad de relevar a los trabajadores de las subcontratistas por encontrarse las obras finalizadas; procede a analizar los trabajadores en la nómina de LUMMA S.A.

Fecha de firma: 13/07/2023

Firmado por: JUAN A FANTINI ALBARENQUE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: WALTER FABIAN CARNOTA, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

Firmado por: NORA CARMEN DORADO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: AMANDA LUCIA PAWLOWSKI, SECRETARIA DE CAMARA



#37058217#360979304#20230628090413339



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

En este orden de ideas y en cuanto a la procedencia del relevamiento de los trabajadores de LUMMA S.A., corresponde avanzar en el análisis de la segunda presunción efectuada por la Administración, la cual surge al analizar los sueldos de los empleados relevados. Dicha presunción consiste en que todo monto depositado en la cuenta de un trabajador corresponde a depósitos efectuados por su empleador, he aquí a mi entender una de las presunciones que no resiste análisis, atento ser plenamente conocido que en las cuentas sueldos se pueden realizar depósitos y/o transferencias de parte de cualquier persona física y/o jurídica, no siendo el empleador el único habilitado a tales efectos.

La Administración, en el caso de encontrar inconsistencias entre los montos declarados por LUMMA S.A. como sueldo bruto en los respectivos F.931, el sueldo neto efectivamente depositado y lo que surge del sistema SITER, en vez de presumir que dichas inconsistencias respondían a conceptos remunerativos no incluidos en las DDJJ, el fisco debió analizar, produciendo la prueba necesaria a tal efecto, la procedencia de dichos montos, para así tener dicha presunción una base cierta. Sobre todo, teniendo en cuenta la amplitud dispositiva del organismo, que habiendo accedido mediante sistema SITER al total de los montos existentes, período por período, en las cuentas sueldo de los trabajadores relevados, decide no investigar sobre el origen de los mismos, y determinar sin más que la totalidad de lo depositado proviene del depósito de la aquí apelante, y que por lo tanto hubo omisión por parte de la empresa al momento de efectuar la declaración de los sueldos.

Cabe señalar que la presunción debe ser el punto de partida de un procedimiento de investigación exhaustivo, donde todas las pruebas necesarias para su comprobación se lleven a cabo. Resulta oportuno poner de manifiesto que existiendo hechos y pruebas insuficientes, el fisco no debió limitarse a los datos vertidos en el acta, sino que, por el contrario, en virtud del principio inquisitivo o de oficialidad, la autoridad administrativa debió dirigir el procedimiento y ordenar que se practique toda diligencia que sea conducente para el esclarecimiento de la verdad y la justa resolución de la cuestión planteada, como pudo ser –entre otras- la obtención de prueba alguna a fin de constatar la exclusividad del CUIT depositante en las cuentas sueldo.

Aunque el procedimiento puede ser iniciado de oficio o a instancia de parte, la impulsión de éste corresponde a la administración, en razón de que con él no se tiende a satisfacer simplemente un interés individual, sino un interés público: el administrativo (ver Hutchinson, Tomás; " Régimen de Procedimientos Administrativos, Ley 19.549 ", pág. 29 y ss.).

Con lo cual, al no haber arbitrado el organismo, los medios indispensables que tenía a su alcance, tendientes a corroborar la veracidad de los hechos invocados por la recurrente,

Fecha de firma: 13/07/2023

Firmado por: JUAN A FANTINI ALBARENQUE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: WALTER FABIAN CARNOTA, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

Firmado por: NORA CARMEN DORADO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: AMANDA LUCIA PAWLOWSKI, SECRETARIA DE CAMARA



#37058217#360979304#20230628090413339



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

mal puede ahora sustentar la liquidación de deuda en concepto de aportes y contribuciones y la multa dispuesta, toda vez que el procedimiento está plagado de presunciones sin base cierta alguna.

No se trata de cumplir con un ritualismo procedimental, sino de satisfacer el orden público para arribar a la verdad material, mediante el aseguramiento del derecho de defensa del administrado.

Las normas constitucionales, y en particular aquellas que establecen los derechos de los individuos frente al Estado, son imperativas; es decir, existen y deben ser aplicadas, precisamente porque integran un orden jurídico constitucional superior al Estado.

En este sentido se expidió esta Sala –en su anterior integración- en autos “INGENIO RÍO GRANDE S.A. c/ D.G.I.” sent. 81407 del 31.10.00 en cuanto sostuvo que “...El proceso administrativo debe brindar protección jurídica al particular a la par que asegurar la pronta y eficaz satisfacción del interés general. Es por ello que la observancia de la regla del debido proceso adjetivo debe acentuarse aún más cuando el órgano administrativo resulta, al mismo tiempo, parte y juez dentro de una misma causa, pues en esa doble condición posee más información -inclusive de sus propios registros- que le facilita la constatación de las afirmaciones que efectúe el administrado. Por esa razón, el procedimiento administrativo recursivo debe ser abierto a prueba tanto cuando el órgano administrador lo crea necesario como cuando el administrado así lo solicita a fin de acreditar los hechos que invoca. Sólo así se garantiza su derecho de defensa, arribando a una mayor racionalización y eficacia de los trámites cumplidos, valorando las probanzas aportadas y conducentes para incursionar a fondo en la realidad económica analizada, primando así el principio de la verdad material o real, rector indiscutido de la labor fiscalizadora del cumplimiento de las obligaciones tributarias en general.”

El procedimiento administrativo debe ser transparente, en el que se asegure el pleno y cabal conocimiento del interesado de la gestión que se lleve a cabo, permitiéndole argumentar, producir y controlar todas las medidas de prueba que proponga y hagan a su derecho, como así también las que la propia administración impulse en su búsqueda de la verdad. Con ello, no sólo se garantiza el derecho de defensa de éste, sino una mayor racionalización y eficacia de los trámites administrativos, facilitándose a los funcionarios que deben expedirse una información más amplia y completa. Posteriormente, compete al organismo administrativo apreciar las probanzas producidas, no ya en base a principios rígidos, sino de manera lógica y natural, aquilatando cada una de ellas en su individualidad y dentro del conjunto de la rendida.

Fecha de firma: 13/07/2023

Firmado por: JUAN A FANTINI ALBARENQUE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: WALTER FABIAN CARNOTA, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

Firmado por: NORA CARMEN DORADO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: AMANDA LUCIA PAWLOWSKI, SECRETARIA DE CAMARA



#37058217#360979304#20230628090413339



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

Por ello, el organismo no puede basarse solo en la inspección efectuada sin importar otros elementos para determinar la deuda, debió haber ahondado aún más en materia probatoria para sostener o desvirtuar las inconsistencias detectadas.

La formulación de estos procesos lógicos, aceptados y regulados (ver Ley 26.063 título II) necesariamente deben ajustarse a un criterio de razonabilidad respetando el debido proceso adjetivo y garantía de defensa en juicio, debiendo de este modo agotarse todos los medios para poder arribar en forma precisa la materia imponible.

Por otro lado, incluso considerando que las presunciones efectuadas por la Administración fuesen suficientes para generar el grado de convicción necesario para resolver de la forma en la que lo hizo, lo que ya adelante no comparto, la misma incurre en un grave error al efectuar el cálculo de la base presunta a fin de determinar los aportes y contribuciones adeudados. Ya que conforme surge de las actuaciones acompañadas, en vez de tomar el monto SITER, (que es el monto que la Administración presume como sueldo real de los trabajadores relevados) y descontarle el monto declarado por LUMMA S.A., para así calcular la diferencia; efectúa el cálculo sumando al sueldo bruto, el sueldo neto efectivamente depositado, dando una base a fin del cálculo de los aportes y contribuciones totalmente exorbitante. Considerando, además, como cierto que los montos depositados en las cuentas sueldos de los trabajadores de LUMMA S.A. corresponden en su totalidad a los realizados por la empleadora, y existiendo entre los mismos y los declarados por la apelante una diferencia, la Administración a fin de calcular lo adeudado en concepto de aportes y contribuciones, debería haber tomado como base para el cálculo el monto SITER (por ser el monto mayor), agregarle al mismo los porcentajes correspondientes a los aportes y contribuciones y calcular sobre ese total los mismos, para luego restar los efectivamente ingresados por la apelante y determinar los montos adeudados en concepto de aportes y contribuciones.

Respecto a la hipótesis de que del análisis de los sueldos declarados en F.931 muchos no superaban el sueldo mínimo vital y móvil, no surge en las actuaciones administrativas que se hubiere realizado un estudio exhaustivo del tema, surge de la documental acompañada que LUMMA S.A. cuenta con una larga lista de trabajadores, seguramente las condiciones laborales de cada uno eran diversas, ya sea porque efectuaban distintas tareas, o tenían una jornada laboral diferente y en consecuencia un sueldo disímil, por lo tanto para determinar que los salarios declarados no superaban el SMVM la Administración debió haber indagado sobre las condiciones particulares de cada trabajador, a tal efecto, podría haber citado a declarar a determinados trabajadores, y sobre dicha prueba recién establecer la base presunta de que todos los trabajadores con un sueldo menor al SMVM se encontraban realizando jornada completa.

Fecha de firma: 13/07/2023

Firmado por: JUAN A FANTINI ALBARENQUE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: WALTER FABIAN CARNOTA, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

Firmado por: NORA CARMEN DORADO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: AMANDA LUCIA PAWLOWSKI, SECRETARIA DE CAMARA



#37058217#360979304#20230628090413339



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

El hecho de estructurar el procedimiento únicamente en base a las presunciones señaladas, aparece cuanto menos dogmático frente a la complejidad de la materia a analizar y la imperiosa necesidad de contar con mayores elementos de juicio. La utilización de estas presunciones no debe ser entendida como la instauración del principio de la responsabilidad objetiva, sino como un régimen probatorio característico de la figura tributaria (en similar sentido ver Fallos: 312:149). Por lo cual, ante la ausencia de elementos probatorios conducentes, en lo que hace a la comprobación de las presunciones que sustentan el reclamo, imponiéndose descalificar el proceder llevado a cabo por el organismo administrativo tributario.

Por último, cabe subrayar que la administración incurrió en otra inconsistencia al incluir en la fiscalización el período 07/2017, siendo que mediante formulario F.800/P obrante a fs. 111 Act. 19930-20-21 - 2do. Cuerpo (DEO 7229192) surge que los períodos a fiscalizar son los correspondientes al 12/2016 a 06/2017.

Por consiguiente, dado los argumentos expuestos, propicio se declare la nulidad del procedimiento incoado y de las resoluciones dictadas en consecuencia, debiendo darse intervención nuevamente a la Administración a fin de que produzca la prueba necesaria a fin de dilucidar plenamente la situación laboral y previsional de los trabajadores involucrados en la presente causa.

Respecto a los restantes agravios considero abstracto expedirme al respecto, en virtud en la forma en la que se propone resolver.

En cuanto a las costas, dadas las particularidades del caso y la forma en la que se resuelve, corresponde imponerlas por su orden (art. 68 2do párrafo CPCCN).

Ahora bien, corresponde al juzgador analizar la labor desarrollada por los profesionales a fin de regular sus honorarios, teniendo en cuenta no sólo los montos cuestionados sino también la complejidad de la materia debatida, la eficacia de las tareas y la extensión de los trabajos llevados a cabo por los letrados. “La regulación no depende exclusivamente del monto del juicio o de las escalas pertinentes, sino de todo un conjunto de pautas previstas en los regímenes respectivos, que pueden ser evaluadas por los jueces con un amplio margen de discrecionalidad, entre las que se encuentran la naturaleza y complejidad del asunto, el mérito de la causa, la calidad, eficacia y la extensión del trabajo” (voto del Dr. Carlos S. Fayt). (CSJN T. 315 , P. 1620).

En consecuencia, se tomará en cuenta la labor desarrollada por el letrado, la calidad, eficacia e importancia económica del proceso (Conf. Doctrina art. 1255 CCyCN y lo establecido por el Alto Tribunal en Establecimiento Las Marías S.A.C.I.F.A. c/Misiones, Provincia de s/ acción, declarativa. Sent. Del 4 de septiembre de 2018). Se regulan los honorarios de la dirección letrada de la parte actora en 25 UMA \$ 483.450 (conf. Acordada

Fecha de firma: 13/07/2023

Firmado por: JUAN A FANTINI ALBARENQUE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: WALTER FABIAN CARNOTA, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

Firmado por: NORA CARMEN DORADO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: AMANDA LUCIA PAWLOWSKI, SECRETARIA DE CAMARA



#37058217#360979304#20230628090413339



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

19/2023). Importe al que se le adicionara el IVA en caso de corresponder (Cfr. Excma. C.S.J.N. en el fallo Compañía General de Combustibles S.A. s/recurso de apelación” sent. del 16.06.03, Fallos 316:1533). Respecto a los honorarios de la dirección letrada de la demandada resulta aplicable lo dispuesto por el art. 2 Ley 27.423.

Por las consideraciones vertidas precedentemente, propicio: 1) Revocar la resolución recurrida y ordenar al organismo a que lleve a cabo nuevamente un procedimiento respetando el debido proceso adjetivo en base a los argumentos esgrimidos precedentemente, 2) Imponer las costas en el orden causado (conf. art. 68 2do párrafo del CPCCN.), 3) Regular los honorarios de la dirección letrada de la parte actora en 25 UMA \$483.450 (conf. Acordada CSJN 19/2023) importe al que se le adicionara el IVA en caso de corresponder. Respecto a los honorarios de la dirección letrada de la demandada resulta aplicable lo dispuesto por el art. 2 Ley 27.423.

LA DOCTORA NORA CARMEN DORADO DIJO:

El ordenamiento jurídico vigente concede a la AFIP la facultad de ejercitar el poder de policía tributario y previsional con el objeto de evitar situaciones de fraude y/o evasión que pongan en jaque el normal funcionamiento del Estado (arts. 3º ley 11.683, 2º del decreto 507/93 y 2º de la ley 26.063). Es por ello que el mencionado organismo cuenta con prerrogativas especiales para exigir el cumplimiento de las cotizaciones impositivas y/o previsionales insatisfechas teniendo amplios poderes de verificación y fiscalización, pudiendo valerse, en la emergencia de una serie de presunciones legales (arts. 33, 34 y 35, ley 11.683 y 3º de la ley 26.063) que tienen las características de ser “iuris tantum”, es decir susceptibles de ser alteradas por prueba en contrario.

Las presunciones a las que estoy haciendo referencia, deben ser aplicadas con prudencia y racionalmente. Ello en virtud de lo establecido por los artículos 7º y 9º de la ley 19.549 ya que los actos de los organismos autárquicos del Estado deben estar motivados, tener causa cierta y encontrarse adecuadamente fundamentados tanto desde el punto de vista fáctico como jurídico por encontrarse desautorizada toda vía de hecho o abuso de derecho.

Cabe señalar, en tal sentido, que la razón de ser de las presunciones legales estriba en la necesidad de asegurar la efectividad de una institución o de ciertas situaciones jurídicas de orden social, político, familiar o patrimonial con apoyo en la ciencia o en las reglas de la experiencia (conf. Gozáni, Osvaldo, “Tratado de Derecho Procesal Civil” Tº II pág.536) y, en el caso que nos ocupa, nos encontramos ante una situación compleja emergente de un reproche solidario de responsabilidad contra la empresa Lumma SA sobre la base de lo establecido por los arts. 14 y 30 de la LCT por lo que cualquier decisión que





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

tome la Administración Federal de Ingresos Públicos debe contar con sólidos fundamentos, y en consonancia con lo dispuesto por los arts. 17 y 18 de nuestra Carta Magna toda vez que ninguna persona puede ser privada de su propiedad sino tras el debido proceso legal.

Por todo lo expuesto, adhiero a la propuesta del Dr. Fantini Albarenque.

EL DOCTOR WALTER F. CARNOTA DIJO:

Adhiero al voto del Dr. Fantini con las puntualizaciones expresadas por la Dra. Dorado.

En mérito de lo que resulta del presente acuerdo, el Tribunal **RESUELVE:** 1) Revocar la resolución recurrida y ordenar al organismo a que lleve a cabo nuevamente un procedimiento respetando el debido proceso adjetivo en base a los argumentos esgrimidos precedentemente, 2) Imponer las costas en el orden causado (conf. art. 68 2do párrafo del CPCCN.), 3) Regular los honorarios de la dirección letrada de la parte actora en 25 UMA \$483.450 (conf. Acordada CSJN 19/2023) importe al que se le adicionara el IVA en caso de corresponder. Respecto a los honorarios de la dirección letrada de la demandada resulta aplicable lo dispuesto por el art. 2 Ley 27.423.

Regístrese, protocolícese, notifíquese y oportunamente devuélvase.

NORA CARMEN DORADO

Juez de Cámara

WALTER FABIAN CARNOTA

Juez de Cámara Subrogante

JUAN FANTINI ALBARENQUE

Juez de Cámara

ANTE MÍ: AMANDA LUCIA PAWLOWSKI

Secretaria de Cámara

PAR

Fecha de firma: 13/07/2023

Firmado por: JUAN A FANTINI ALBARENQUE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: WALTER FABIAN CARNOTA, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

Firmado por: NORA CARMEN DORADO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: AMANDA LUCIA PAWLOWSKI, SECRETARIA DE CAMARA



#37058217#360979304#20230628090413339